

Cronología del conflicto Enero-abril 2006

Seoane, José; Algranati, Clara. Los movimientos sociales en la geopolítica continental. En publicación: OSAL, Observatorio Social de América Latina, año VI, no. 19. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina: Argentina. julio. 2006.

Acceso al texto completo: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/introcronos.pdf>

Los movimientos sociales en la geopolítica continental¹

José Seoane y Clara Algranati

En el marco del proceso de disputa entre la reconfiguración de la gobernanza neoliberal y la construcción de alternativas que recorre nuestra América Latina y Caribeña, el primer semestre de 2006 –anunciando en perspectiva lo que podrá deparar su culminación– aparece surcado por una continuada serie de elecciones² que signarán a lo largo del año la renovación de buena parte de las estructuras de gobierno a nivel nacional³ y por la intensificación de la confrontación alrededor de las iniciativas orientadas a profundizar la integración subordinada al mercado mundial en general y particularmente a la hegemonía estadounidense.

En su densidad, estos elementos parecen dar forma a una redefinición del mapa geopolítico del continente que computa, en sus avances y retrocesos, diferentes alineamientos, alianzas y conflictos a nivel regional. La importancia de estos procesos no oculta sin embargo que en el entramado de esta malla se enhebra, como una de sus fuerzas cinéticas, la acción colectiva de grupos y sectores

[AÑO VII N° 19 ENERO-ABRIL 2006]

OSAL 109

sociales, y en particular de aquellos que dieron emergencia a los significativos movimientos sociopolíticos que encarnaron el ciclo de resistencias al neoliberalismo durante la última década y forjaron en su experimentación alternativas y horizontes emancipatorios. Movimientos que enfrentan hoy, como lo señaláramos en otras oportunidades, un escenario diferente que plantea tanto desafíos como amenazas.

Es en este contexto que la conflictividad social en el subcontinente vuelve a crecer significativamente a lo largo del primer cuatrimestre de 2006 respecto de lo registrado para los últimos cuatro meses de 2005 (11,46 %). Esta evolución es principalmente el resultado del incremento de las acciones relevadas en la región Andina (14,6%), que expresan lo acontecido especialmente en Ecuador y Venezuela. También el conflicto se incrementa en el Cono Sur (11%) y la región Norte, comprendida por México, Centroamérica y el Caribe (8,5%). Sin embargo, en el primero de estos dos últimos casos, las realidades nacionales son más heterogéneas de lo que pareciera indicar a primera vista el incremento de la conflictividad social: mientras que la misma crece particularmente en Brasil y Paraguay, disminuye en Chile y Uruguay, y en menor medida en Argentina. En el caso de la región Norte, aunque el incremento de los hechos de protesta es proporcionalmente menor, sus expresiones a nivel nacional resultan mucho más regulares. Así, las acciones colectivas de contestación social del primer cuatrimestre resultan más elevadas respecto de las registradas para el último período del pasado año en siete de los nueve países considerados (República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México).

Como es habitual en esta sección, a continuación intentaremos bosquejar una apretada crónica analítica de estos procesos de conflicto y movilización social así como de los principales eventos políticos y económicos acontecidos recientemente en América Latina y el Caribe, particularmente aquellos que tuvieron lugar en el primer cuatrimestre del corriente año, período comprendido por las cronologías que se publican posteriormente y a cuya lectura el presente artículo persigue introducirnos.

Movimientos sociales y bienes comunes de la naturaleza en la región Andina

El 1º de mayo, a cien días de su asunción, el presidente boliviano Evo Morales habrá de anunciar la firma del decreto que avanza sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia (ver el decreto en la sección Documentos de este número). La recuperación del control estatal sobre la extracción y comercialización del gas y el incremento de la apropiación pública de la renta gasífera, junto a los posteriores anuncios de distribución de tierras improductivas bajo el llamado al inicio de la "revolución agraria", expresarán en el terreno de las políticas gubernamentales tanto el peso de la bautizada agenda de octu-

“Las consecuencias a nivel nacional de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno y el escenario de disputas que plantea hacia delante habrán de poner nuevamente de manifiesto la relevancia que le cabe a la contienda sobre los bienes comunes de la naturaleza y el lugar de los mismos en la formulación de alternativas de neoliberalismo”

bre promovida por los movimientos populares como la afectación de los intereses de las empresas y las élites de las regiones hidrocarburíferas y latifundiaras, particularmente de la oligarquía santacruceña, en el camino de las próximas elecciones para la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre las autonomías departamentales (2/7).

Las consecuencias a nivel nacional de las medidas adoptadas por el nuevo gobierno y el escenario de disputas que plantea hacia delante habrán de poner nuevamente de manifiesto la relevancia que le cabe a la contienda sobre los bienes comunes de la naturaleza y el lugar de los mismos en la formulación de alternativas al neoliberalismo, en la perspectiva de un modelo que, entre otras cuestiones, parece orientarse, en similar dirección a la de la experiencia venezolana, a la reapropiación estatal de los beneficios de la explotación de los bienes comunes naturales y del control sobre las empresas privatizadas con el objetivo de promover una redistribución progresiva de la riqueza social y que suma, en este caso entre otras cuestiones, el desafío del desmantelamiento de un régimen colonial de poder.

En estos sentidos, el impacto del proceso boliviano se hará sentir también en el área Andina y a nivel regional, no sólo en las tensiones con los gobiernos de países vecinos —particularmente a partir de los intereses de PETROBRAS y las élites brasileñas en las reservas gasíferas y la explotación sojera en el país andino— sino también en la reconfiguración de los bloques y alternativas regionales y en los “horizontes de cambio” a nivel nacional bajo la impronta de la efectiva posibilidad de los mismos más allá de la pretendida excepcionalidad de la experiencia venezolana. Resulta una nueva expresión del algoritmo cínico del neoliberalismo el que se haya tachado como antidemocrática y autoritaria la decisión soberana de un gobierno que traduce en su gestión los compromisos asumidos en la campaña electoral y frente a los movimientos populares que hubieron de protagonizar una prolongada e intensa “guerra de posiciones contra el neoliberalismo”

(Tapia, 2005) en los años pasados. En este contexto, la asunción de Evo Morales como nuevo presidente (22/1) –precedida por la ceremonia indígena en Tiwanaku– se transformó en una verdadera fiesta popular luego de tantas luchas marcadas con su trágica cuota de sangre. El debate sobre las características, desafíos, dificultades y riesgos que este nuevo escenario plantea para los movimientos sociales bolivianos es abordado, desde distintas perspectivas, en las contribuciones recogidas en el primer dossier del presente número del OSAL (ver los artículos de Aníbal Quijano, Álvaro García Linera, Boaventura de Sousa Santos, Pablo Stefanoni, Lorgio Orellana y Pablo Cuba Rojas en este número).

En un contexto de descenso del conflicto social, durante los primeros cuatro meses del año se destacan las protestas impulsadas por los trabajadores de la empresa privatizada Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), que frente a diferentes problemas laborales inician una serie de acciones que recogen apoyo de diversos sectores sociales, especialmente en Cochabamba, y suponen la transitoria intervención gubernamental de la empresa aunque no la estatización reclamada por el personal en un conflicto que continúa abierto. Así también se prolongan las luchas promovidas por organizaciones de trabajadores de la educación y la salud públicas en reclamo de incremento salarial y nuevas designaciones, que concluyen con acuerdos provisorios y/o apertura de negociaciones con el nuevo gobierno⁴.

A lo largo de febrero se desarrolla la pugna y negociación sobre las leyes de convocatoria a la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico –que expresan los intereses de los movimientos sociales populares por un lado y de las élites de los departamentos gasíferos, especialmente Santa Cruz, por otro– finalmente aprobadas por el parlamento a inicios de marzo como resultado de un difícil compromiso entre las diferentes bancadas⁵. Estas leyes definieron las características y alcances que tendrá la Constituyente (que habrá de iniciar sus sesiones en agosto) y el referéndum sobre las autonomías que habrá de realizarse a comienzos de julio (2/7) junto con la elección de los convencionales. Tras su aprobación, en abril la presión de las élites santacruceñas se intensificará bajo las amenazas de la “Asamblea de la Cruceñidad” de convocar a un nuevo paro cívico y las protestas en la localidad de Puerto Suárez en defensa de la instalación de una siderúrgica brasileña –en el marco del cual llegan a retener en calidad de rehenes a ministros del gobierno nacional. En este contexto, la batalla por los hidrocarburos parece prolongarse –en un clima de débil movilización– en el llamado de un arco de movimientos sociales y del gobierno a votar negativamente en el referéndum autonómico así como en la composición que habrán de conquistar las diferentes fuerzas en la Asamblea Constituyente. Un nuevo escenario donde volverá a dirimirse la contraposición entre los proyectos populares de cambio y los de conservación del neoliberalismo y los privilegios en Bolivia.

La disputa social en relación con los hidrocarburos y los acuerdos de libre comercio también habrá de signar el escenario político en Ecuador, que se apresta a afrontar elecciones presidenciales en octubre próximo. Ya durante el pasado año el rechazo al TLC con EE.UU. y el reclamo por la caducidad del contrato de la petrolera estadounidense OXY habían cristalizado socialmente como la programática general asumida por un amplio arco de movimientos sociales y protestas que, entre otras razones, consiguieron demorar la conclusión del tratado.

En el marco de la continuidad de las negociaciones bilaterales (el 3/4 se realiza la XIV ronda, restando según los anuncios una más para concluir el proceso), la serie de movilizaciones que protagonizan a principios de año estudiantes y trabajadores (particularmente de la empresa estatal de petróleo PETROECUADOR) presenta, junto a sus diferentes reivindicaciones particulares, el rechazo al TLC y a la OXY. En marzo nuevamente el cuestionamiento al TLC y la OXY habrá de colocarse en el centro de la atención política con la serie de protestas, marchas, paros territoriales y cortes de ruta impulsados por el movimiento indígena en la región de la sierra ecuatoriana, que se combina con reclamos locales de mayor presupuesto. A pesar de las negociaciones y concesiones que el gobierno del presidente Alfredo Palacio parece hacer a las reivindicaciones particulares –tal como aconteció con las anteriores– y la represión de las fuerzas de seguridad, la protesta se reanuda hacia fines de marzo bajo la iniciativa de la marcha (toma) a Quito que levanta también la bandera de la nacionalización de los hidrocarburos. El levantamiento indígena impulsado por la CONAIE –que se prolonga con las acciones de la FENOCIN y FEINE en abril– da cuenta de la recuperación de la capacidad de convocatoria y acción de dicha organización luego de las gravosas consecuencias que le deparara el anterior gobierno de Lucio Gutiérrez.

Bajo el peso de la protesta y los reclamos sociales a fines de abril, la sanción de una ley que incrementa moderadamente el porcentaje de apropiación pública de la renta petrolera motiva a EE.UU. a suspender las negociaciones; y posteriormente, la decisión gubernamental de rescindir finalmente el contrato de la OXY habrá de confirmar dicha suspensión. Si en el marco de los procesos que se viven en la región andina la experiencia ecuatoriana vuelve a poner de manifiesto tanto la capacidad de los movimientos sociales de alcanzar conquistas como el papel central que le cabe en la disputa social a los bienes comunes de la naturaleza, los aprestos hacia las futuras elecciones plantean nuevos desafíos y riesgos hacia delante.

En contraposición a lo acontecido en estos meses en Ecuador, en Perú y en el marco de la campaña hacia las elecciones presidenciales y legislativas el conflicto desciende significativamente. En este escenario, y frente a las revelaciones de los compromisos asumidos en el capítulo agrícola del TLC por el gobierno, se destaca el paro agrario de 48hs.

(29 y 30/3) impulsado por la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) contra el TLC y reclamando la convocatoria a un referéndum sobre el mismo. A posteriori de dicho paro, la Junta Nacional Electoral valida las firmas necesarias para pedir la convocatoria a referéndum presentadas por la campaña peruana contra el TLC, pasando entonces la iniciativa a tener que ser considerada por el Parlamento.

En un marco de denuncias y acusaciones cruzadas entre los tres primeros candidatos (Ollanta Humala, Alan García y Lourdes Flores) se realizarán a principios de abril las elecciones presidenciales (primera vuelta) y legislativas (9/4), donde “más de dos terceras partes de los electores apostaron por el cambio” (Revesz, en este número). Finalmente la segunda vuelta (4/6) consagrará al candidato del APRA como nuevo presidente del Perú, quedando el tratamiento parlamentario del TLC a cuenta del Congreso.

En el caso del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, y en un contexto de relativa estabilización del conflicto, a fines de febrero se anuncia la conclusión del TLC con EE.UU. Si bien no tienen lugar las significativas movilizaciones del año anterior, prolongando pasadas protestas contra la política educativa gubernamental, en este cuatrimestre se destacan los conflictos protagonizados por estudiantes universitarios –y en algunos casos también profesores– que se inician con las acciones frente a los intentos de cierre de la Universidad del Atlántico (Barranquilla) y se extienden hasta la Marcha Nacional Universitaria de fines de marzo en rechazo de los intentos de ajuste y privatización de la educación y del TLC con EE.UU. A pesar del importante cuestionamiento social a dicho acuerdo, las elecciones legislativas (12/3) y presidenciales (28/5) darán el triunfo al presidente Uribe y la coalición política que lo acompaña por más del 60% de los votos, obteniendo así su reelección, hecho que se da por primera vez en más de 90 años⁶. Esta revalidación del gobierno colombiano en el marco de un importante abstencionismo, característico en

“En el caso del gobierno de Álvaro Uribe en Colombia, y en un contexto de relativa estabilización del conflicto, a fines de febrero se anuncia la conclusión del TLC con EE.UU.”

parte de las últimas compulsas en dicho país, parece señalar la particular eficacia electoral de la política bautizada por el oficialismo como de “seguridad democrática”, que “retoma con mayor fuerza la penalización de la protesta social, acompañándola con un discurso que legitima la estigmatización y la exclusión de las propuestas que no empatizan con su proyecto de régimen autoritario” (Betancur, en este número).

Por último, si bien resta aún tiempo para las próximas elecciones presidenciales en Venezuela a realizarse el próximo diciembre (3/12), el debate sobre la actitud que adoptará la oposición ante las mismas y las posibilidades de un candidato único, así como la convocatoria a la movilización hacia dicha compulsas lanzada por las fuerzas bolivarianas, habrán de cruzar la escena política durante estos meses. Por otra parte, continuando con su política social, el gobierno bolivariano pone en marcha nuevas “misiones” (entre ellas la llamada “Negra Hipólita” contra la pobreza) y aprueba el plan excepcional de desarrollo económico y social orientado a garantizar los programas de construcción de viviendas populares en todo el país.

El importante crecimiento de los conflictos en este país durante el primer cuatrimestre de 2006 expresa por una parte el incremento de las protestas y ocupaciones de terrenos suburbanos protagonizadas tanto por los damnificados por las recientes lluvias que perdieron sus hogares como por los habitantes de las barriadas populares. La disputa por la tierra también se extiende, como en pasados cuatrimestres, a las zonas rurales donde las organizaciones campesinas, al tiempo que demandan la agilización de las expropiaciones, exigen poner fin a la acción de los sicarios de los latifundistas.

Por otra parte, protagonizadas especialmente por estudiantes universitarios, en marzo tienen lugar diferentes movilizaciones en reclamo de seguridad a raíz de un irresuelto y sonado caso de un doble secuestro. Posteriormente, el asesinato de los secuestrados y la aparición de sus cuerpos desencadenan marchas en Caracas y en diferentes ciudades del país a principios de abril exigiendo la renuncia del ministro del Interior. Sumando otros recientes casos similares, estas demandas se prolongan en la marcha de fin de mes en la ciudad capital. El carácter opositor al gobierno bolivariano de dichas movilizaciones –que parecen reproducir estrategias similares a las acontecidas en otros países de la región– queda por demás evidenciado en la contramarcha que organizan las fuerzas chavistas en esa oportunidad. En el mismo contexto del enfrentamiento entre los proyectos bolivariano y liberal, en marzo se registra el lanzamiento de la agrupación política “Rumbo Propio” del estado petrolero de Zulia, donde gobierna la oposición, que reivindica la autonomía de la región.

En esta dirección, al tiempo que se acentúan las tensiones entre el gobierno venezolano y el de los EE.UU., la política continental del gobierno del presidente Hugo Chávez habrá

de renovar las iniciativas hacia acuerdos de integración energética regional que, sumado al rumbo del nuevo gobierno boliviano y los acuerdos suscritos entre ambos, marcarán la cartografía de los procesos de reconfiguración de los bloques, las alianzas y las alternativas en la región.

Cartografía de los proyectos imperiales y las alternativas regionales

En el marco de la mundialización neoliberal iniciada décadas atrás y de las tensiones al interior del bloque imperial global (Quijano, en este número), la reciente iniciativa estadounidense de cara al continente hubo de expresarse en los intentos de acelerar los tratados de libre comercio, la infraestructura necesaria para el transporte de los bienes y mercancías, y la protección y control de los territorios donde los mismos se encuentran. Si el avance de estos procesos ha supuesto la colonización neoliberal, reconfiguración y crisis de los anteriores acuerdos regionales de integración bajo un patrón de subordinación continental, el primer cuatrimestre de 2006, condensando desarrollos del pasado reciente, ha estado signado tanto por la intensificación de tales procesos como por las alternativas que se yerguen ante ellos.

En este sentido, la iniciativa del movimiento altermundialista y la búsqueda de una efectiva integración desde los pueblos bajo la convocatoria a la construcción de esa "Otra América" se darán cita hacia fines de enero en Caracas (Venezuela) en ocasión del VI Foro Social Mundial policéntrico sede Américas (y II Foro Social Américas), primer encuentro continental luego de las jornadas de noviembre del año anterior en la ciudad argentina de Mar del Plata que hubieron de frustrar el relanzamiento de la iniciativa estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Las resistencias y alternativas de los movimientos sociales frente a los tratados de libre comercio y la militarización regional volverán a reunirse en el V Encuentro Hemisférico contra el ALCA⁷ (La Habana, abril) así como en otros foros y contracumbres que tendrán lugar en estos meses, entre ellos los realizados frente al IV Foro Mundial de Agua (México, abril), la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, Brasil, marzo), y la IV Cumbre de presidentes de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (bajo la convocatoria al segundo encuentro "Enlazando Alternativas", Viena, mayo).

Pero, por su significación y masividad, las movilizaciones de los inmigrantes latinos en EE.UU. frente a las propuestas legislativas de criminalizarlos y profundizar el control fronterizo ciertamente resultarán una de las experiencias más sobresalientes. En una serie iniciada a principios de marzo (10/3) y que se prolonga en las acciones de inicios de abril, las movilizaciones alcanzarán su cenit el 1º de mayo, cuando bajo la consigna "un

día sin inmigrantes” habrán de intensificarse las marchas signadas bajo la convocatoria a un paro en aquel único país donde siguen silenciadas las trágicas jornadas de 1886 que inspiraron la conmemoración internacional del día de los trabajadores (ver el artículo de Raúl Ross Pineda y Luciano Concheiro Bórquez en este número).

En el contexto de estas multitudinarias manifestaciones y del debate parlamentario en EE.UU. sobre el “control de la inmigración y los inmigrantes” habrá de tener lugar la segunda Cumbre presidencial de la Alianza para la Prosperidad y la Seguridad de la América del Norte (ASPAN, 31/3) que, iniciada el pasado año, prolonga en el terreno policial-militar y energético la supremacía conquistada por los EE.UU. a través del NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) (Saxe-Fernández, 2006). Publicitada como una cumbre para avanzar en acuerdos sobre “fronteras inteligentes y seguras, manejo de emergencias y seguridad energética”, la misma será seguida por la decisión del gobierno estadounidense de prolongar el “muro de la vergüenza” en la frontera con México e incrementar las fuerzas de seguridad en dicha área.

La iniciativa norteamericana de expandir en la región latinoamericana estos tratados de libre comercio había logrado en 2005 la ratificación parlamentaria del acuerdo CAFTA-RD en cinco de los seis países centroamericanos y caribeños involucrados (El Salvador, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala, con la excepción de Costa Rica). Sin embargo, su puesta en vigencia quedó subordinada a la incorporación de una serie de reformas legislativas exigidas por EE.UU. y justificadas bajo la necesidad de adecuar las normativas nacionales a los compromisos asumidos en el acuerdo plurilateral. Esta situación, que lleva a un proceso de presiones y sucesivos pactos, pone de manifiesto tanto el impacto de dichos acuerdos internacionales sobre la mentada soberanía nacional como la lógica impuesta por la diplomacia estadounidense de intervención y permanente renegociación en el sentido de obtener y asegurarse los mayores beneficios de los mismos. Finalmente EE.UU. convalida la entrada en vigencia del CAFTA-RD en el caso de El Salvador (1/3), Nicaragua y Honduras (1/4) luego de que los Congresos de estos países accedieran a aprobar las reformas requeridas⁸. En el caso de Panamá, que está en tratativas por un TLC con EE.UU., tiene lugar la IX ronda de negociaciones⁹, en la que subsisten diferencias, postergándose la conclusión del tratado para un próximo encuentro¹⁰.

En otro terreno, la integración regional en el ámbito de la coordinación de las fuerzas armadas y policiales, que constituye una de las prioridades para la Casa Blanca, suma nuevos pasos a lo largo del primer cuatrimestre de 2006. En este período tiene lugar una nueva reunión de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas¹¹ (23/3), donde se acuerda la creación de un batallón de mantenimiento de la paz en la región a disposición de la ONU. Por otra parte, en estos meses se realizan en la región diferentes ejercicios militares que involucran al ejército estadounidense así como entrega de finan-

ciamiento y equipamiento para las fuerzas de seguridad. El carácter regional de esta estrategia y su estrecha imbricación con la protección de los emprendimientos económicos que se despliegan por detrás de los TLC se ponen de manifiesto con el reinicio de las fumigaciones en zonas mineras de Guatemala en el marco del Plan Maya Jaguar, ahora bajo el asesoramiento brindado por el gobierno colombiano, así como el despliegue de personal militar y policial en las regiones cafetaleras en Nicaragua¹².

Por otro lado, en relación con los países andinos, al anuncio del presidente peruano Toledo de la conclusión del acuerdo comercial con EE.UU. en diciembre pasado se suma, a fines de febrero, similar proclama de Álvaro Uribe, presidente de Colombia. Ambos TLC reconfiguran y precipitan la crisis de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que se hace pública con el retiro de Venezuela de dicho acuerdo. Las revelaciones del capítulo agrícola del TLC con Perú (31/1) así como lo comprometido y las nuevas exigencias formuladas por EE.UU. sobre similares ítems en el acuerdo con Colombia no sólo despiertan nuevas protestas de los sectores rurales, sino que también preanuncian el catastrófico impacto que el mismo habrá de tener sobre los productos rurales y las economías campesinas, así como sobre la alimentación y la seguridad alimentaria de estos países.

La intensidad que cobran las movilizaciones en Ecuador y la debilidad del gobierno de Alfredo Palacio se conjugan para que la negociación del TLC con EE.UU. permanezca suspendida hasta el momento, así como el triunfo y la asunción del gobierno de Evo Morales en Bolivia consolidan el alejamiento de ese país de dicho acuerdo. El TLC Andino parece así quedar restringido a Perú y Colombia.

Se ha señalado en otras oportunidades el papel que representa el gobierno de Álvaro Uribe (y su modelo de guerra y seguridad electoralmente exitoso) para EE.UU. como “enclave fundamental... para su estrategia de guerra en el continente” (Solano, 2006), especialmente por la proyección regional del Plan Patriota hacia los países limítrofes (Iniciativa

“La intensidad que cobran las movilizaciones en Ecuador y la debilidad del gobierno de Alfredo Palacio se conjugan para que la negociación del TLC con EE.UU. permanezca suspendida hasta el momento”

Andina), que en el presente cuatrimestre volverá a desencadenar reiterados cruces diplomáticos con Ecuador por la invasión de su espacio aéreo. Profundizando esta dirección, el gobierno colombiano entabla diversos acuerdos de cooperación con Guatemala y Paraguay para el asesoramiento en la persecución del narcotráfico y el terrorismo.

En este último caso, dicha colaboración, explicada por la aparente operación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en suelo guaraní, prolonga una política marcada por los recientes ejercicios militares estadounidenses en dicho país, que parecen hacer del mismo “uno de los puntos nodales de la estrategia hegemónica de Estados Unidos” en el Cono Sur (Ceceña y Motto, 2005). En esta dirección, durante el primer cuatrimestre de 2006 los gobiernos de Paraguay y Uruguay formulan diversas críticas al MERCOSUR, justificadas por las efectivas asimetrías en los beneficios que este acuerdo dispensa a las economías menos desarrolladas, y sugieren la posibilidad de pasar a condición de miembros asociados para estrechar sus lazos comerciales con EE.UU.

Como contracara de estos procesos, en el terreno de la iniciativa gubernamental se afirman las propuestas tanto de integración energética como de expansión y sostenimiento regional de un conjunto de políticas sociales que tendrán en el acuerdo suscripto entre Venezuela, Bolivia y Cuba –a través de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP)– la expresión de un eje emergente a nivel regional.

En este terreno, el gobierno venezolano avanza durante los cuatro primeros meses del año en la creación de emprendimientos petroleros bilaterales con gobiernos municipales en Nicaragua y El Salvador (ALBA Petróleos de Nicaragua y El Salvador respectivamente) y hace similar oferta hace al nuevo gobierno hondureño, así como da vida a la empresa PDV-CUPET con Cuba. En la misma dirección, y posteriormente a la rescisión del convenio con la empresa estadounidense OXY en Ecuador tras las protestas acontecidas en dicho país, firma diversos acuerdos en Quito. Hacia el Sur del continente, la iniciativa bolivariana toma cuerpo principalmente en el impulso al proyecto de construcción de un extenso gasoducto que, luego de sucesivas negociaciones, parece querer abarcar de Caracas a La Paz incluyendo a los cuatro países del MERCOSUR, acuerdo al que el país venezolano se está integrando.

Sin embargo, este espacio regional se encuentra atravesado por múltiples tensiones, además de las ya mencionadas, en relación nuevamente con el carácter público de los bienes comunes naturales y la apropiación privada de los mismos (particularmente a través de la inversión extranjera). Tal es la raíz de los contrapuntos expresados tanto ante la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia como frente al cuestionamiento de la instalación de dos empresas papeleras trasnacionales sobre el margen uruguayo del río compartido con Argentina (y que parece coronar la expansión del monocultivo de eucaliptos en el país

oriental). En este sentido, las disputas y los sentidos que asume la integración regional vuelven a anudarse en los conflictos y procesos que se forjan a nivel nacional.

Del Río Bravo al Canal de Panamá: resistencias al libre comercio y la guerra infinita

Ciertamente, los tratados de libre comercio y las consecuencias de la dinámica de integración subordinada que estos impulsan fueron uno de los blancos de las resistencias y conflictos sociales recientes en la región Mesoamericana. Conflictividad social que, según los registros producidos por el OSAL, se incrementa en el primer cuatrimestre de 2006 por segundo período consecutivo. En el caso del CAFTA-RD, las protestas, aunque de menor intensidad que las acontecidas en el año anterior, se orientan ahora en la mayoría de los casos contra las reformas legislativas exigidas por los EE.UU. para la entrada en vigencia del tratado, así como contra los proyectos y políticas amparados por estos acuerdos.

En este nivel se destaca la serie de movilizaciones y conflictos en El Salvador que convocan a un amplio arco de organizaciones sociales pero que toma particular intensidad en la resistencia de los vendedores ambulantes amenazados por las aprobadas reformas de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, en un contexto de crecimiento del conflicto social en Guatemala, la oposición al CAFTA-RD –junto al rechazo a los desalojos y los reclamos por el acceso a la tierra, contra la explotación minera y la política educativa– forma parte del pliego reivindicativo que parece acompañar la convergencia de las principales organizaciones sociales. Luego de abandonar la mesa de diálogo con el gobierno (22/2) estas participan de la Marcha Nacional Maya y Popular (30/3) que se realiza en el onceavo aniversario de la firma de los Acuerdos de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Semanas después, tras la insatisfactoria respuesta gubernamental y en un clima de amedrentamiento represivo, las organizaciones campesinas e indígenas, junto a otros movimientos sociales, promueven el levantamiento maya y popular (20/4) que toma cuerpo en decenas de movilizaciones y bloqueos de carreteras y puntos estratégicos en todo el país. Por otra parte, en el marco de conflictos contra los emprendimientos mineros e hidroeléctricos que tuvieron lugar en el pasado año, en abril la Corte Constitucional reconoce las consultas populares realizadas en las localidades de Río Hondo (Zacapa) y Sipacapa (San Marcos), donde las poblaciones se pronunciaron mayoritariamente contra la instalación de una represa y una mina respectivamente. Ciertamente, este incremento de la beligerancia social es uno de los factores que pueden explicar el hecho de que el conjunto de las reformas exigidas para la puesta en marcha del CAFTA-RD no hayan sido implementadas hasta ahora en este país.

También el debate sobre el CAFTA-RD, en un contexto de moderado incremento del conflicto social, habrá de ganar un espacio significativo en la campaña hacia las elecciones

nes presidenciales y legislativas (5/2) en Costa Rica luego de las significativas protestas que antecedieron al envío del proyecto al parlamento. La relativa paridad de votos obtenidos por el candidato Oscar Arias (claramente el favorito antes de las elecciones, que había expresado su apoyo al acuerdo con EE.UU, y finalmente resultó ganador y nuevo presidente) y Ottón Solís (que proponía una renegociación del tratado) dará muestra de la vigencia de una fuerte oposición social a la ratificación del proyecto.

La elección presidencial en Costa Rica no será la única acontecida en esta región a lo largo del primer cuatrimestre de 2006. También tendrá lugar la elección presidencial en Haití, que contra las expectativas estadounidenses otorgará el triunfo a René Preval, así como las elecciones legislativas y municipales en El Salvador (12/3) y en República Dominicana (16/5) y las de concejales de las Regiones Autónomas del Atlántico Sur y Norte en Nicaragua (5/3), las cuales inician un calendario electoral que habrá de arribar a las elecciones presidenciales y legislativas en dicho país el próximo noviembre. La intervención estadounidense en la región se expresa también en el terreno electoral cuando el embajador de dicho país ofrece su colaboración en la tarea de unificar las fuerzas liberales y conservadoras ante la posibilidad de un triunfo del FSLN.

La creciente presencia militar estadounidense en el istmo y las políticas de criminalización de la acción de los movimientos populares despiertan también diferentes conflictos y denuncias. Entre los acontecidos en la región se destacan las protestas contra el operativo norteamericano “Nuevos Horizontes 2006” en la provincia de Barahona en República Dominicana que se inicia a principios de enero –tras denuncias del intento de construir en la zona una base militar de dicho país– para crecer a medida que arriban los contingentes de soldados, hasta llegar a la importante movilización multisectorial que tiene lugar a fines de marzo.

El escenario de la contestación social en la región mesoamericana a lo largo de este primer tercio del año se ve atravesado también por importantes conflictos protagonizados por los trabajadores del sector público. Según los registros provistos por el OSAL, los mismos representan un 25% del conjunto de los hechos de conflicto relevados para los ocho países centroamericanos y caribeños considerados¹³, siendo que igual categoría significa sólo un 16% del total registrado para el conjunto de la región latinoamericana. Ciertamente, la geografía de estas protestas da cuenta de la vigencia y profundidad de las políticas de privatización y ajuste fiscal promovidas especialmente por el FMI, y de su impacto más allá de los difundidos procesos de renegociación, reducción y/o condonación de parte de la deuda externa de la región.

En el caso de Nicaragua, el año 2006 se inicia con la continuidad de la prolongada huelga de médicos iniciada casi dos meses atrás, a la que se suma a fines de enero el paro

de los trabajadores del sector de la salud pública. Huelgas, movilizaciones y ocupaciones de hospitales recorrerán todo el primer cuatrimestre en reclamo de incremento salarial y mayor presupuesto para el sector. También los conflictos impulsados por los empleados de la administración pública nacional y municipal tienen lugar en El Salvador, así como las movilizaciones de los docentes están presentes en muchos de los países centroamericanos y en México contra el proyecto legislativo de reforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Estas experiencias de cuestionamiento a una política regresiva como única respuesta posible al déficit fiscal habrán de expresarse también en Puerto Rico hasta transformarse en el centro de una crisis política. Ante las dificultades de aplicar una reducción del gasto fiscal por la resistencia sindical, y de obtener aprobación al proyecto de reforma tributaria que amplía el peso de los impuestos al consumo por la oposición parlamentaria, el gobierno puertorriqueño habrá de amenazar hacia fines de abril con el cierre de numerosas oficinas estatales y despidos masivos. La explosión de la crisis motivará la intensificación de las movilizaciones promovidas por la mayoría de las organizaciones sindicales (que plantean una reforma tributaria progresiva) y de aquellos sectores que apoyan los proyectos del Poder Ejecutivo o de la oposición parlamentaria, alcanzándose una solución provisoria entre ambos poderes del Estado que pospone hacia delante la definición de la pretendida reforma.

El conflicto social crece también, aunque moderadamente, en México, en un contexto político signado por la campaña electoral para las presidenciales de principios de julio (2/7), las segundas elecciones de gobierno nacional luego del fin del régimen priísta que hubo de prolongarse durante siete décadas y tras la frustración de las expectativas de una efectiva democratización de la sociedad mexicana –abiertas seis años atrás– bajo el imperio de las contrarreformas neoliberales que se prolongaron e intensificaron durante el gobierno del presidente Vicente Fox (Oliver Costilla, en este número). En este escenario, el futuro gobierno del primer país latinoamericano que sufrió la implementación de un acuerdo de libre comercio con EE.UU. (NAFTA, 1994) habrá de dirimirse entre el candidato del partido de gobierno Felipe Calderón (PAN), la formulación “progresista” enarbolada por el ex alcalde de la ciudad de México Andrés Manuel López Obrador (PRD) o el retorno del PRI encabezado por Roberto Madrazo.

A distancia crítica de dichas candidaturas y de las posibilidades de cambio que pueden esperarse de las elecciones, a principios de enero se inicia la llamada “otra campaña” impulsada por el zapatismo a partir de la convocatoria realizada en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y que llevará a una delegación encabezada por el Subcomandante Marcos (bautizado delegado Zero) a través de todo México, promoviendo decenas de encuentros con todos aquellos “de abajo y a la izquierda” para

“construir desde abajo y por abajo una alternativa a la destrucción neoliberal, una alternativa de izquierda para México” (EZLN, 2005) en una “lucha que consiste en organizar, con los excluidos y oprimidos, un proyecto anticapitalista” (González Casanova, en este número).

Por otra parte, uno de los conflictos que tiene lugar en este primer cuatrimestre del año es el ciclo de protestas y movilizaciones desencadenadas frente a la decisión gubernamental de desconocer –a poco tiempo del inicio de las negociaciones del convenio colectivo– al dirigente nacional del sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos, acusado de corrupción, y de avalar a su opositor, que cuenta con las simpatías de los grupos empresariales mineros¹⁴. En esta serie de movilizaciones y protestas, a fines de abril, la huelga en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas (Michoacán) habrá de ser respondida por una brutal represión policial que cobrará la muerte de dos trabajadores.

Días después, la ferocidad e impunidad del accionar de las fuerzas represivas habrá de reproducir y acentuar su tendal de víctimas en la localidad de Atenco, próxima a la capital. Sus pobladores hubieron de convocar la atención pública en el pasado cuando se opusieron con éxito a perder sus tierras para la construcción de un nuevo aeropuerto para la ciudad de México, considerado una de las obras del sexenio por el gobierno de Vicente Fox. A principios de mayo, luego de que campesinos se enfrentaran con la policía, cientos de fuerzas represivas avanzarán sobre el pueblo de Atenco, protagonizando una batalla por su ocupación que se prolongará durante dos días, resultando en el asesinato de dos jóvenes y decenas de heridos y detenidos que sufren feroces abusos y maltratos. A esta trágica lista habrá de sumarse, al momento de haber concluido estas líneas, la brutal represión sufrida por los maestros de Oaxaca, que en el marco de un prolongado conflicto en demanda de aumento salarial son desalojados violentamente de la plaza principal de la ciudad que ocupaban desde semanas atrás, con un saldo de muertos, heridos, abusos y maltratos a los detenidos. La ferocidad y reiteración de esta trágica secuencia, inescindible de la propia campaña electoral, parece poner nuevamente de manifiesto el papel que les cabe a los diagramas represivos bajo formas de democracia representativa en la estrategia de la dominancia neoliberal.

Los conflictos sudamericanos

En el sur de América registramos también un crecimiento del conflicto respecto del pasado cuatrimestre. El mismo prolonga una tendencia sostenida desde enero de 2005 que lleva acumulado desde entonces un incremento del 52%. En este sentido, la región tiende a concentrar un porcentaje creciente de la conflictividad del conjunto regional, abarcando en los últimos dos cuatrimestres un tercio de las protestas consignadas por el OSAL.

Es en Brasil donde registramos el mayor aumento de los hechos de protesta respecto del periodo anterior. Siendo este un año electoral, los conflictos se dinamizan entre aquellos sectores que no vieron cumplidas sus expectativas por el gobierno o bien se oponen a medidas anunciadas (ver artículos de Graça Druck y Virginia Fontes en este número). En este sentido, particularmente los campesinos, en gran medida miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) pero también pertenecientes a otras organizaciones, intensifican las tomas de tierras. El importante protagonismo de este movimiento durante el presente cuatrimestre se expresa en que sus acciones se multiplican por 5 en relación con las registradas para el período anterior.

En esta serie, a comienzos de marzo el MST inaugura las "Jornadas de Lucha por la Reforma Agraria" o "2006 Vermelho" que movilizan a miles de familias para exigir al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) que realice nuevas clasificaciones de las áreas. Este plan de lucha se propone presionar al gobierno para lograr asentamientos y denunciar el agronegocio y la promoción de la floresta homogénea. Hasta el 12 de marzo los campesinos contabilizan 55 ocupaciones de haciendas y predios públicos en todo el país. Mientras tanto la justicia procesa a miles de campesinos que participan de las ocupaciones y a 37 líderes del movimiento acusados de planearlas.

Por otra parte, la organización internacional Vía Campesina ocupa un importante lugar en las protestas de Brasil que, al ser sede de dos eventos internacionales, es también escenario de la construcción de cumbres paralelas y manifestaciones por parte de los movimientos sociales. En primer lugar, durante la primera semana de marzo, se realiza en Porto Alegre la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y en simultáneo la Vía Campesina organiza el "Foro Tierra, Territorio y Dignidad". En la localidad de Barra do Ribeiro, mujeres del movimiento destruyen material con mutaciones genéticas y semillas de eucalipto para denunciar el "latifundio verde" creado por el monocultivo de dicha especie y sus consecuencias sociales y ambientales, coincidiendo además con el Día Internacional de la Mujer. En segundo lugar, hacia fines de marzo, tienen lugar en Curitiba el 3° Encuentro del Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad y la 8ª Conferencia de la Convención sobre Diversidad Biológica de la ONU, que reúne a los 187 países firmantes. En paralelo al evento, los movimientos instalan el "Campamento Tierra Libre de Transgénicos" donde se reúnen seis mil agricultores. Los campesinos manifiestan frente al predio donde sesiona la convención de ministros para denunciar los acuerdos que benefician a las compañías multinacionales y a las grandes empresas y exigen la prohibición de la tecnología que esteriliza semillas y el desalojo de laboratorios ilegales.

Por último, otro evento que convoca a distintos sectores pero a nivel nacional es el II Foro Social Brasileiro, que en la ciudad de Recife reúne a unas 500 organizaciones socia-

“El mundo urbano también se ve sacudido por importantes conflictos en los primeros meses del año, entre ellos los que tienen epicentro en las cárceles y en los barrios populares en San Pablo y Río de Janeiro”

les. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se encuentra en el país para participar de una cumbre con los presidentes de Brasil y Argentina, se hace presente en el foro y recibe críticas de los campesinos al presidente brasileño pero afirma enfáticamente la importancia de que Lula sea reelecto en las próximas elecciones de octubre. El Foro concluye con un llamado de los participantes al presidente Lula para que divulgue, antes de dichas elecciones, una nueva “Carta al pueblo brasileño” que constituya un compromiso con los trabajadores para ser cumplido en su próximo mandato.

El mundo urbano también se ve sacudido por importantes conflictos en los primeros meses del año, entre ellos los que tienen epicentro en las cárceles y en los barrios populares en San Pablo y Río de Janeiro, las dos ciudades más importantes del Brasil. A mediados de mayo los integrantes del Primer Comando da Capital (PCC) realizan ataques simultáneos a comisarías, incendian colectivos y se amotinan en 29 cárceles del país, entre otras acciones coordinadas que dejan decenas de muertos y paralizan por completo la ciudad de San Pablo durante 3 días. Por otra parte, a inicios de marzo el ejército realiza una ocupación con 1.600 militares en las favelas de Río de Janeiro que se prolonga 12 días en busca de armamentos robados. En la prensa se divulga que los militares negocian con los integrantes del llamado Comando Vermelho (CV) la devolución de las armas. Por entonces los habitantes de las favelas militarizadas protestan contra la presencia del ejército y denuncian abusos por parte de los gendarmes. Por último, también vale mencionar la realización en diferentes puntos del país de huelgas y protestas de funcionarios públicos de diferentes dependencias, por mayor presupuesto y aumento salarial, entre otras reivindicaciones.

En Paraguay la presentación que hace el presidente Nicanor Duarte Frutos al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para ser habilitado para ejercer también la presidencia del partido Colorado –cuestión que está prohibida por la Constitución pero que finalmente es

autorizada— así como también su interés en habilitar la reelección presidencial, impulsan a la oposición a crear una mesa coordinadora contra estas iniciativas, compuesta por el conjunto de las organizaciones sociales y partidos políticos del arco opositor. Alrededor de 100 organizaciones de este espacio realizan (29/3) la manifestación multisectorial más importante de los últimos años bajo el lema “Resistencia Ciudadana, Dictadura Nunca Más”. La movilización logra que el Senado repudie la violación de la Constitución por parte del presidente.

En este contexto, son muy significativas las protestas de los campesinos afectados por las consecuencias climáticas de los desmontes realizados para la siembra de soja. A comienzos de febrero la Federación Nacional Campesina (FNC) se moviliza en 12 puntos del país por tiempo indefinido reclamando al Ministerio de Agricultura y Ganadería medidas concretas para ayudar a los productores a superar la crisis que afecta al campo debido, fundamentalmente, a las prolongadas sequías.

Simultáneamente, la persecución a las organizaciones campesinas y de izquierda se incrementa, así como se suceden violaciones a los derechos humanos por parte de organismos de seguridad del estado o avaladas por estos a partir de las llamadas “comisiones de seguridad ciudadana” en un período además signado por asesinatos selectivos de dirigentes sociales. Por otro lado, existe una campaña mediática de criminalización de las organizaciones campesinas que son acusadas de estar gestando un movimiento guerrillero con la colaboración de las FARC. Bajo esta hipótesis se propicia la cooperación con el gobierno colombiano en la lucha contra el secuestro y el terrorismo. Sin embargo, hacia comienzos de junio, organizaciones campesinas denuncian a un dirigente del partido Colorado por haber ofrecido dinero a un presunto testigo para que simulara ser un guerrillero arrepentido y denunciara a un importante líder campesino de la Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares del Paraguay (CNOCIP) por su supuesta participación en una organización armada de Alto Paraná. Los campesinos presentan pruebas contundentes del hecho en el Senado nacional.

Por otra parte, en Argentina en este período disminuyen levemente los conflictos respecto del último cuatrimestre de 2005. La principal protesta la realizan los vecinos de Gualguaychú contra las papeleras que se están construyendo en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos. En cuanto a las protestas eminentemente obreras se destaca la huelga por tiempo indeterminado de los petroleros de Las Heras, Santa Cruz —provincia donde el presidente Kirchner fuera gobernador durante 12 años— en demanda del aumento del mínimo salarial que no tributa impuesto a las ganancias y el encuadramiento sindical único de todos los trabajadores de las empresas petroleras. A mediados de febrero, cuando el paro cumple 15 días, se producen choques entre los trabajadores y la policía con el saldo de un policía muerto y varios heridos. Posteriormente, la ciudad

es ocupada por la gendarmería en un clima de creciente tensión, siendo que los organismos de derechos humanos denuncian apremios ilegales y detenciones indebidas. Al calor de la divulgación nacional de estos hechos, el gobernador de la provincia renuncia, así como algunos oficiales son procesados, mientras que posteriormente los trabajadores logran el cumplimiento de sus principales demandas.

En este país es importante considerar también la significación que adquiere el 30º aniversario del golpe militar acontecido el 24 de marzo de 1976. Tanto la iniciativa de las organizaciones sociales –que históricamente convocan y participan de la movilización– cuanto la importancia que el gobierno nacional le asigna a la conmemoración –que es declarada día feriado nacional– instalan el tema en el centro de la opinión pública. Sin embargo, la masiva manifestación cristalizará también en cardinales diferencias y fuertes enfrentamientos –con impacto en la prensa nacional– entre las organizaciones ligadas al oficialismo y las firmemente opositoras en torno a la caracterización del gobierno y la situación del país. Por último, vale destacar los paros y asambleas que realizan los productores ganaderos de diferentes asociaciones contra la disposición gubernamental de frenar las exportaciones de carne como parte de las medidas implementadas para controlar el incremento de los precios.

Volviendo al caso del conflicto por la instalación de las papeleras en la localidad uruguaya de Fray Bentos, la Asamblea Ambientalista de la ciudad de Gualeguaychú, integrada por una multiplicidad de sectores sociales, despliega un abanico de formas de protesta entre las cuales se destaca –por el impacto alcanzado– el corte durante 26 días de la ruta 136 que une ambas ciudades y países. Ante el crecimiento del conflicto, que convocará a una multitudinaria movilización hacia fines de abril, y la expansión de los cortes a otras ciudades fronterizas de la misma provincia argentina, el gobierno impulsará el reclamo contra las papeleras en el Tribunal Internacional de La Haya en base a la violación del tratado del río Uruguay firmado por ambos países en 1975. En el marco de esta estrategia, finalmente los vecinos deciden suspender el corte del puente fronterizo y esperar el dictamen del tribunal internacional.

En tanto, en Uruguay el conflicto con la Argentina se ve agudizado por el perjuicio económico que sufre el país a causa del corte de la ruta internacional. Este argumento, así como la ilegalidad de la medida, serán presentados por el país oriental ante el referido tribunal internacional. En este contexto, el presidente Tabaré Vázquez, en declaraciones realizadas en ocasión de una visita a Washington a fines de abril, afirmará que no se descarta un cambio de status en el MERCOSUR –de socio pleno a asociado– si la pertenencia a dicho bloque le impide profundizar su relación bilateral con México y EE.UU. Por otra parte, en relación a los conflictos sociales en Uruguay, se destacan la toma de fábricas y empresas por parte de trabajadores del sector privado que exigen el cumplimiento

de leyes laborales o rechazan despidos. En el campo, los cañeros de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), del Sindicato de Obreros de la empresa azucarera CALNU (SOCA) y de la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalariados Rurales de Bella Unión (APAARBU) ocupan 36 hectáreas de tierras del Instituto Nacional de Colonización (INC) en las inmediaciones de la ciudad de Bella Unión (departamento de Artigas) en demanda de una reforma agraria que expropie los latifundios improductivos y los campos adquiridos por especuladores financieros.

En Chile la victoria en el ballotage (15/1) de la candidata de la Concertación Michelle Bachelet (ver artículo de Tomás Moulian en este número) y su asunción en marzo se ven rápidamente empañadas por una huelga de hambre de presos políticos mapuche que piden ser liberados y que se prolonga por 63 días contando con gran apoyo nacional e internacional. Respecto de la explotación de los recursos naturales, organizaciones sociales repudian un proyecto minero llevado a cabo por una transnacional canadiense en la III Región, mientras que integrantes de la Asociación Mapuche reclaman una solución a la falta de agua en La Araucanía, causada por las plantaciones forestales¹⁵. Por otro lado los mapuche denuncian la militarización de las zonas aledañas al lago Llleu Llleu y las permanentes agresiones sufridas por parte de carabineros.

Por último, vale señalar que sobre fines de abril (26/4) miles de estudiantes de secundaria marchan en la ciudad de Santiago en repudio al límite del uso del pasaje escolar, exigiendo la gratuidad del boleto así como también de la prueba de selección universitaria. El movimiento juvenil bautizado como la “rebelión de los pingüinos” en referencia al uniforme que visten los secundarios, va a extenderse a todo el país hasta alcanzar la movilización de un millón de personas (30/5) en la mayor protesta estudiantil en treinta años. Dichas protestas, organizadas por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), ponen en jaque al nuevo gobierno, mientras la represión policial con cientos de detenidos no alcanza para detener las movilizaciones. Luego de diez días de masivas manifestaciones, los estudiantes dan fin a las acciones tras la propuesta del gobierno, entre otras cuestiones, de crear un Consejo Asesor presidencial que se encargará de proponer reformas a la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, a la Jornada Escolar Completa y al sistema imperante de municipalización de los colegios y que estará integrado por estudiantes, entre otros actores.

Esta movilización de la sociedad chilena, tanto por la juventud de sus protagonistas como por la radicalidad y expansión alcanzada por el movimiento, señala la aparición de una nueva generación que nace de la confrontación con los resultados de la aplicación del modelo neoliberal en la educación y se incorpora así al escenario de la protesta y la experimentación social que recorre América Latina en los últimos años.

Bibliografía

Ceceña, Ana Esther y Motto, Carlos 2005 "Paraguay: eje de la dominación del Cono Sur" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 17, mayo-agosto.

EZLN 2005 "Sexta Declaración de la Selva Lacandona", México, mimeo.

Saxe-Fernández, John 2005 "Libre mercado, seguridad y el nuevo anexionismo" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N° 18, septiembre-diciembre.

Seoane, José 2006 "Movimientos sociales y recursos naturales en América Latina: resistencias al neoliberalismo, configuración de alternativas", mimeo.

Solano, Lilia 2005 "Terrorismo de estado y Tratado de Libre Comercio: estrategia imperialista en Colombia" en *OSAL* (Buenos Aires: CLACSO) N°18, septiembre-diciembre.

Notas

1 Para la elaboración del presente artículo se han utilizado las cronologías del conflicto social –resultado de una tarea coordinada por el programa OSAL y que abarca el esfuerzo de diferentes investigadores y centros de investigación de la red CLACSO– y los informes respectivos preparados por el equipo del referido programa. A tod@s ell@s nuestros agradecimientos y especialmente a Emilio Taddei por sus comentarios y a Marcelo Perera y Mariana Fassi por las sugerencias y revisión del texto.

2 Las principales elecciones o cambios de gobierno acontecidos en el primer semestre de 2006 son: elecciones presidenciales segunda vuelta (enero) y asunción de Michelle Bachellet en Chile (marzo); asunción del nuevo presidente Evo Morales en Bolivia (enero); asunción del nuevo presidente Manuel Zelaya Rosales en Honduras (enero); elecciones presidenciales en Haití (febrero) y asunción del nuevo presidente René Preval; legislativas y municipales en El Salvador (marzo); presidenciales (primera y segunda vuelta, abril y junio) y legislativas (abril) en Perú; presidenciales (mayo) y legislativas (marzo) en Colombia; legislativas y municipales en República Dominicana (marzo).

3 Por orden cronológico las principales compulsas electorales que restan para el segundo semestre en América Latina y el Caribe son: elecciones presidenciales, legislativas y de Gobernadores en México (julio); congresales para la Asamblea Constituyente en Bolivia (julio); presidenciales (primera vuelta), legislativas y de gobernadores en Brasil (octubre); presidenciales y legislativas en Ecuador (octubre); presidenciales y legislativas en Nicaragua (noviembre); regionales y municipales en Perú (noviembre); municipales en Paraguay (noviembre); presidenciales en Venezuela (diciembre); de alcaldes y municipales en Costa Rica (diciembre).

4 Se suceden también durante enero y luego de la asunción del gobierno diferentes protestas del movimiento cocalero por el desmantelamiento de los cuarteles militares que el ejército tiene instalados en sus regiones. El gobierno de Evo Morales, quien es reelegido durante estos meses al frente de la organización cocalera del Chapare, detiene las fumigaciones y ataques sobre estas poblaciones campesinas y promueve, especialmente a nivel internacional, una campaña por la despenalización del consumo de la hoja de coca y la industrialización y comercialización de la misma.

5 En la medida que el MAS no contaba con los dos tercios de parlamentarios necesarios para aprobar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, se promovió una negociación con las fuerzas de la oposición en el Congreso que supuso particularmente acuerdos en relación con la composición y forma de elección de los convencionales constituyentes y el carácter del mandato resultante del referéndum sobre las autonomías. Finalmente, este fue reconocido como vinculante y la consulta restringida a los departamentos.

6 El segundo lugar en la elección presidencial lo ocupará el candidato del Polo Democrático Alternativo (PDA) Carlos Gaviria con el 22% de los votos, reconfigurando el tradicional escenario partidario, debido a que el Partido Liberal ocupará el tercer lugar y el Conservador hubo de apoyar la candidatura del presidente Uribe.

7 En esta ocasión dicho encuentro fue convocado bajo el título "Encuentro Hemisférico de Movimientos Sociales, Redes y Organizaciones que luchan contra el ALCA y porque una América mejor sea posible".

8 En el caso de Guatemala los negociadores estadounidenses requieren la sanción de reformas legales en el terreno de las telecomunicaciones, propiedad intelectual y contrataciones públicas; en relación con República Dominicana se exige mayor transparencia en el último de estos ítems.

9 Vale resaltar que, en el marco de la expansión del libre comercio, en este período Panamá concluye sendos TLC con Chile y Singapur.

10 Si bien la política de integración subordinada de los EE.UU. para la región resulta la más avanzada y dinámica, otros bloques o países persiguen similar objetivo. Tal es el caso por ejemplo de las negociaciones abiertas entre la Unión Europea y Centroamérica, en razón de las cuales diferentes países del istmo retoman las conversaciones de un TLC con Panamá que es una de las exigencias del bloque europeo para la prosperidad del acuerdo.

11 La Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas fue creada en 1998 e integra a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua.

12 En el marco de este proceso de fortalecimiento de un diagrama represivo regional se destaca en el período también la atención dedicada a la creación y fortalecimiento de cuerpos de seguridad "antidisturbios". En Nicaragua el escuadrón estadounidense SWAT entrena a un batallón especial para tal fin y en El Salvador, luego de las protestas contra el CAFTA-RD, el gobierno anuncia la creación de una unidad especial para combatir los caratulados "delitos en masa".

13 Nos referimos a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

14 El cuestionamiento a esta decisión gubernamental habrá de desembocar en la creación de un espacio de convergencia sindical, denominado primero Frente de Solidaridad en Defensa del Sindicalismo Nacional para luego transformarse en el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical.

15 Desde una perspectiva distinta pero también en relación con la explotación de los bienes comunes naturales, los trabajadores de algunas divisiones de la Corporación del Cobre (CODELCO) entran en huelga indefinida a comienzos de enero en reclamo de un bono salarial acorde con la suba del precio del cobre.